

ECONOMÍA Y TRABAJO



Una mujer se dirige al cementerio de Alustante (Guadalajara). / ANDREA COMAS

La España despoblada pierde en siete décadas la mitad de su peso económico y laboral

LAURA DELLE FEMMINE, Madrid
Sergio del Molino publicó en 2016 su obra *La España vacía*, un ensayo que se ha convertido en una referencia. Su titular se ha asentado en el vocabulario común para describir a aquellas zonas afectadas por una profunda y constante sangría demográfica.

La despoblación supone varios males: pérdida de actividad, merma de servicios, desequilibrios generacionales... Funcas ha puesto números al impacto de este fenómeno: en los últimos 70 años, 23 provincias del interior de España han visto desvanecerse la mitad de su peso demográfico, económico y laboral.

España ha más que duplicado su población desde principios del siglo pasado, hasta alcanzar los 47 millones de habitantes. Pese a ello, su densidad está por debajo de la media europea y es inferior a la de vecinos como Francia e Italia. A ello se añade una abrumadora disparidad entre provincias. El 90% de los residentes se concentra en el 30% de la superficie del país, según el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. El 70% del territorio restante ha sufrido un intenso éxodo a partir de mediados del

siglo XX, que le ha dejado con el 10% de la población y un enorme desafío por delante: sobrevivir. Casi la mitad de los municipios españoles tiene actualmente menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, el umbral fijado por la UE para identificar territorios en riesgo de despoblación. El estudio de Funcas *La despoblación de la España interior* analiza las provincias de siete comunidades autónomas, excluyendo las capitales de provincia y las localidades de más de 50.000 habitantes. Castilla y León acapara la ma-

yoría, con sus nueve provincias: Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. También están las tres aragonesas, Huesca, Teruel y Zaragoza; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara, en Castilla-La Mancha; Badajoz y Cáceres, en Extremadura; Lugo y Ourense, en Galicia; Córdoba y Jaén, en Andalucía; y La Rioja. Todas comparten dos rasgos: han perdido habitantes entre 1950 y 2019 y, en ese último año, presentaban una densidad de población por debajo de la media nacional.

Las conclusiones son elocuentes. En 1950, estas 23 provincias acumulaban el 34,1% de la población, generaban el 26,7% del valor añadido bruto y suponían el 33,5% del empleo del país. Siete décadas después, estas variables se han desinflado: ahora representan el 18,1% de población y el 17% del empleo. Casi la mitad. Y aportan un 16,1% del valor añadido bruto. La evolución del PIB a lo largo de los últimos 70 años refleja lo ocurrido: en siete de estas provincias, la tasa de crecimiento medio anual desde 1950 fue inferior en casi un punto a la media nacional, y más de medio punto inferior en otras siete.

Pese ello, la brecha en la renta por habitante con el resto de España se ha ido estrechando, aunque no siempre por mejoras de la actividad. "Una parte importante de esta convergencia se debe a los movimientos migratorios", explica Eduardo Bandrés, profesor en la Universidad de Zaragoza y autor del estudio junto a Vanessa Azón. "Tampoco se trata de las provincias con los peores indicadores; hay otras, por ejemplo, con tasas de paro más altas. Pero es cierto que la despoblación también conduce a una situación de malestar económico".

La caída poblacional y económica de la España interior comenzó en los años cincuenta y se aceleró en las dos décadas posteriores, con fugas masivas del campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades. El proceso siguió, con menos intensidad pero con un progresivo envejecimiento de la población, hasta 1991. En este periodo, los municipios estudiados perdieron el 36,3% de sus habitantes, mientras localidades comparables de otras zonas ganaban población. En los noventa hubo una cierta estabilización, seguida por una leve mejora en la década de 2000 gracias a la llegada de extranjeros, que fue truncada por la crisis financiera.

La instantánea que ha dejado este proceso no es homogénea. El estudio reúne las 23 provincias en tres grupos. La *España despoblada que decrece* tiene el peor saldo demográfico y ha sufrido una fuerte destrucción de empleo, pero no tiene mal desempeño en el resto de indicadores económicos. En ella se incluyen 11 provincias como Soria, Ourense o Teruel. La *España que se estanca* —las provincias del sur— está menos enve-

Una cuestión de Estado

La despoblación y el declive demográfico han ganado protagonismo y poco a poco se han convertido en un asunto de Estado. La UE ha reconocido la magnitud del reto, que afecta a varios de sus países miembros, y ha afinado la asignación de fondos para que lleguen a las zonas más castigadas y se impulsen las políticas adecuadas. España también ha puesto el reto demográfico entre sus prioridades, mientras que los territorios más afectados exigen recursos adicionales para cubrir los mayores costes que supone la dispersión poblacional e intentar revertir la tendencia.

Los fondos europeos que llegarán para hacer frente a la crisis desatada por la covid-19 también podrán ayudar a frenar, al menos en parte, la despoblación del interior: "Pueden apoyar mucho, hay que dirigirlos a actividades con futuro", considera el economista Eduardo Bandrés, quien añade que se podrían haber impulsado, en el pasado, otras políticas para modular el proceso. "Pero se hubiera producido de cualquier manera, era irreversible", sentencia.

jecida, con niveles de renta más bajos y un peso importante de la agricultura. La *España que remonta* es la mejor parada: incluye localidades que se han beneficiado de la cercanía a la capital, como Guadalajara, o que cuentan con capitales de provincia pujantes, como Valladolid o Zaragoza.

"En el estudio no hemos entrado en las recomendaciones, pero está claro que hacen falta políticas distintas", avanza Bandrés. Sugiere intensificar las relaciones entre lo urbano y lo rural, mejorar las infraestructuras del transporte y, sobre todo, las telecomunicaciones: "Pero hay que ser selectivos, elegir las inversiones. Hay localidades donde se deben garantizar los servicios, aunque la situación es irreversible: van a desaparecer", concluye el autor del estudio.

OPINIÓN / ANDREU MISSÉ

La verdadera brecha territorial

La investigación desarrollada por los profesores Eduardo Bandrés y Vanessa Azón de la Universidad de Zaragoza para Funcas, *La despoblación de la España interior*, es una aportación sustancial para valorar la verdadera brecha territorial que ha sufrido España en los últimos 70 años. El trabajo pone al descubierto que los verdaderos perdedores del desarrollo de las últimas décadas, que fue tan beneficioso para el conjunto del país, han sido las 23 provincias que forman lo que los autores denominan *la España despoblada*.

En estas provincias, el peso relativo de la población y del empleo en el conjunto nacional durante este periodo ha caído casi a la mitad y su economía ha sufrido una

pérdida de crecimiento anual de casi un punto porcentual de PIB.

El trabajo ofrece una visión mucho más precisa de las disparidades territoriales reales que la clásica de las desigualdades entre comunidades fuertemente politizada. Esta nueva perspectiva es muy oportuna por las decisiones que está tomando Europa sobre esta materia. Revela la importancia de las Administraciones locales y de la UE para remediar las injustificables diferencias de las condiciones de vida de los ciudadanos de los distintos territorios. El 22,2% de europeos que vive en zonas rurales está en riesgo de pobreza y exclusión social. Este porcentaje es inferior en las ciudades (20,3%) y en los pueblos (18%).

Por primera vez, Europa se ha fijado como una prioridad el desafío del envejecimiento y la despoblación nombrando una comisaria con rango de vicepresidenta. Dušanka Šuica, para la cartera de Democracia y Demografía. El histórico Consejo Europeo del pasado julio que aprobó el fondo de rescate acordó también apoyar a las regiones que han registrado una pérdida de habitantes superior al 1% anual y las que tienen una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Es el caso de Soria, Teruel, Cuenca, Palencia y Zamora. Šuica se ha comprometido a que todas las zonas rurales tengan banda ancha para 2025.

El reciente estudio *The demographic*

landscape of EU Territories (El panorama demográfico de los territorios de la UE) para el Parlamento Europeo destaca "la necesidad de políticas que afecten al nivel local donde también son más importantes para los ciudadanos de la UE, porque es aquí donde las decisiones pueden tener un impacto más directo en sus condiciones de vida". Desde el Tratado de Maastricht (1993), la UE tiene como propósito "crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa". Cuando se examina este objetivo se considera la evolución del crecimiento de la economía por habitante entre los distintos Estados. Los resultados son desalentadores. La última crisis ha ampliado la brecha entre los ciudadanos. Entre 2006 y 2019, el PIB per cápita en Alemania ha crecido un 41%, muy superior al 23,7% de Francia y mucho más que el 16,8% de España y el 11,4% de Italia. Una política europea dirigida directamente a las regiones despobladas es más necesaria que nunca para alcanzar el compromiso europeo.